



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

El ejercicio de la abogacía: el abogado del siglo XXI.

Autor/es

MÓNICA MARÍA DEL CAMPO ECHEVARRÍA

Director/es

JUAN MANUEL MURILLAS ESCUDERO

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2017-18



El ejercicio de la abogacía: el abogado del siglo XXI., de MÓNICA MARÍA DEL CAMPO ECHEVARRÍA

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

© El autor, 2018

© Universidad de La Rioja, 2018

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es

EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA: EL ABOGADO EN EL SIGLO
XXI.

THE EXERCISE OF THE ADVOCACY: THE LAWYER IN THE XXI
CENTURY.

TRABAJO DE FIN DE GRADO.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

ESTUDIANTE: MÓNICA MARIA DEL CAMPO
ECHEVARRIA.

TUTOR: DR. D. JUAN MANUEL MURILLAS
ESCUDERO.

CURSO: 2017/2018.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ACCESO A LA ABOGACÍA.	6
2.1. Normativa.	6
2.2 Requisitos de acceso.	11
2.3 Procedimiento	13
3. JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO.	15
3.1. Normativa.	15
3.2 Caracteres de la justicia gratuita y el turno de oficio.	17
3.3 Consejo General de la Abogacía Española.	20
3.4 Requisitos de acceso a la justicia gratuita.	21
3.5 Requisitos del turno de oficio.	24
4. DEONTOLOGÍA.....	28
4.1 Código Deontológico de la Abogacía.	28
4.2 Obligaciones éticas y deontológicas.	29
4.3 Independencia y libertad de defensa.	30
4.4 Incompatibilidades.	31
5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ABOGADO.....	32
5.1 Naturaleza de la relación abogado-cliente. Tipos de contrato.	32
5.2 Naturaleza y tipos de responsabilidad del abogado.	35
5.3 Valoración de daños e indemnización.	39
6. ABOGACÍA EN EL SIGLO XXI: SIGLO XXI: ACTUALIDAD Y TECNOLOGÍA. UN NUEVO ENFOQUE DE LA ABOGACÍA.	43
7. CONCLUSIONES	48

RESUMEN

Con el presente trabajo, trataremos de hacer un análisis y reflexión sobre una de las profesiones más importantes y más antiguas de nuestra sociedad como es la abogacía, intentando abordar las cuestiones que consideramos sus principales características con un fin divulgativo e informativo pretendiendo que sirva principalmente para todo aquel estudiante de derecho y futuro abogado, así como a estos mismos en el desarrollo de toda su trayectoria profesional.

Trataremos también de ofrecer una visión acerca de la postura de los profesionales jurídicos a la hora de tener que “aceptar” o bien respetar su libre decisión de aceptar cuestiones controvertidas y no bien vistas socialmente.

Por último, podremos comprobar cómo se está desarrollando en este siglo XXI, cómo tiene que ser capaz de adaptar los servicios jurídicos a la sociedad actual en continua evolución legislativa y tecnológica con el fin de poder ofrecer mejores soluciones y contribuir de la forma más efectiva posible para con toda la sociedad.

ABSTRACT

With this work, we will try to make an analysis and reflection on one of the most important and oldest professions of our society such as the legal profession, trying to address what we consider its main characteristics with an informative purpose, pretending that it serves mainly for all that student of right and future lawyer, as well as to these same ones in the development of all their professional trajectory. We will also try to offer a better view about the position of legal professionals when it comes to having to "accept" or respect their free decision to accept controversial issues and not well seen socially.

Finally, we will be able to verify its evolution throughout the twentieth century and how it is developing in this 21st century, how it has to be able to adapt to new times and new situations in order to be able to offer better solutions and contribute to the as effectively as possible for the whole society.

1. INTRODUCCIÓN

La abogacía es una de las profesiones más antiguas que conocemos. Nacida en India, cinco siglos (a.de C.), gracias a la creación de MANÚ, una suerte de código en el que se recogían disposiciones normativas relativamente precisas, algo básico para el ordenamiento de la sociedad y de las relaciones en general, en el que se establecía además el deber de transmitir el Manú por todos los hombres instruidos a sus discípulos. En este código es donde encontramos además la primera referencia al abogado que enseña el derecho, al que se le llamará Bracman.¹

En Grecia, los conocedores de la oratoria, eran los encargados de hacer las defensas, ya que estos, con su marcada elocuencia, impresionaban a los miembros del areópago, siendo Pericles, el primer abogado profesional, ya que es en esta época, cuando la abogacía adquiere la condición de ser profesión.

En Roma, sin embargo, la defensa estaba a cargo de la figura el patrono, más adelante, debido a la gran expansión de la profesión, se hizo necesaria la creación de una escuela para formar técnicos en oratoria y leyes, organizándose en los *Collegium Togatorum*. Con Justiniano se establecieron someramente las bases del estudio del derecho, exigiendo a los romanos la edad mínima de 17 años para ejercer y cinco años mínimo de estudio. Durante la República, siguiendo a Pérez Vaquero, la asistencia jurídica era gratuita, como en Grecia, sin embargo, fue un tiempo después cuando se generalizó la entrega de “dádivas” a estos advocatum por sus servicios prestados, origen de la palabra honorario, los “honorarii” que fueron prohibidos en el año 204 a. de.C. aproximadamente mediante la Lex Cincia de Donis et Muneribus” hasta su completo restablecimiento en la época del emperador Claudio.)²

Con estas breves referencias a la historia más antigua de la profesión, podemos decir, que la abogacía ha ido evolucionando siempre en aras de los cambios de la sociedad, por lo que podemos considerarla sin ninguna duda como un pilar fundamental de ésta. Todos necesitamos que nuestros derechos sean protegidos y defendidos debidamente como parte esencial de nuestra condición, que se garantice la seguridad jurídica para que todo

¹SAGAÓN INFANTE, R., “Historia de la Abogacía” en Memoria del III Congreso de Historia de Derecho Mexicano, UNAM-Dirección General de Publicaciones, México DF, 1983, pág. 631.

² PÉREZ VAQUERO, C., “La edad de la abogacía” en *Revista digital-La Gaceta Jurídica*, (2013).

funcione, y eso es a lo que principalmente se dedica la abogacía entre muchas otras cosas. Por lo tanto, este trabajo como hemos mencionado en el resumen, viene a servir de una suerte de “guía” para todos aquellos estudiantes, futuros estudiantes, abogados o futuros abogados, que quieran saber en qué consiste esta profesión, cómo puede acceder a ella, cuáles son sus requisitos, cómo ha evolucionado hasta llegar al siglo XXI. En los puntos primero y segundo hablaremos sobre la normativa de la abogacía, sus requisitos de acceso, el procedimiento para acceder a ella, y la validez de sus estudios.

En cuanto al tercero, tratará sobre la justicia gratuita y el turno de oficio, su normativa, la institución de la abogacía más importante de España como es el Consejo General de la Abogacía Española, los caracteres de la justicia gratuita y el turno de oficio, un estudio acerca de estas dos figuras.

En el cuarto punto, nos centraremos en la deontología profesional, cuáles son las obligaciones y las incompatibilidades de los abogados al ejercer la profesión, su normativa, unido al quinto punto, la responsabilidad del abogado.

Actualmente están proliferando los casos en los cuales se deriva responsabilidad por parte de la actuación del abogado en su defensa para con un cliente o con sus otros compañeros de profesión. Analizaremos cual es el punto principal, contrato abogado-cliente, y las sanciones y/o responsabilidades en las que puede incurrir el abogado por su mala praxis. En cuanto al punto seis, el más importante del trabajo, trataremos de reflejar cómo ha ido evolucionando la abogacía, cómo influye la tecnología actualmente en la profesión (grandes despachos, big data...) para adaptarse a la sociedad cambiante de hoy y no quedarse relegada, ya que como sabemos la ciencia de las leyes, es famosa por ser estática en cuanto a que la asociamos a estar rodeada de grandes libros, largos manuscritos... trataremos entonces de demostrar cómo la abogacía ha dado un giro hacia la informatización completa.

Por último, en el punto 7 se expondrán las conclusiones desde mi punto de vista personal acerca de este trabajo.

2. ACCESO A LA ABOGACÍA.

2.1. Normativa.

La abogacía, siempre ha establecido requisitos para su acceso como parte de sus características esenciales, ya que tiene que estar al servicio del buen funcionamiento de la administración de justicia y de los ciudadanos, es por eso que, en toda su evolución normativa constitucional principalmente, se han implantado requisitos para poder desempeñar el papel de abogado. Disponemos aproximadamente de unas quince normativas profesionales imprescindibles para el desempeño del trabajo.³ De forma resumida detallo lo más relevante de cada una de ellas:

Constitución Española: carácter informativo, el artículo 24 de nuestra Constitución establece el derecho de todos a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión, es por eso por lo que la tarea del abogado es fundamental para el cumplimiento del mandato constitucional, respaldado por el apartado segundo de este mismo artículo que establece el derecho de todos a la defensa y la asistencia por parte de letrado.

Ley Orgánica del Poder Judicial: No encontramos en ella referencias específicas a la función del abogado, pero sí que la consideramos necesaria para el buen desempeño de la profesión, ya que atañe a todos aquellos que forman parte de la administración de justicia.

Estatuto General de la Abogacía: Uno de los textos más importantes para el ejercicio de la profesión al cual nos referiremos en apartados posteriores debido a su papel esencial en la vida del abogado.

*Defensa y Asistencia Jurídica:*⁴ Pese a que también trataremos esta cuestión posteriormente, es importante resaltar esta parte de la normativa profesional puesto que como hemos comentado, se trata de un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva y muchos profesionales del sector se dedican a ello.

³ Véase: Página web del Consejo General de la Abogacía Española.

⁴ Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

*Formación del abogado:*⁵ La ley 34/2006 complementada con sus respectivos reglamentos, se encarga de establecer los requisitos necesarios para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador respectivamente. En esta ley se recogen las materias que deben conocer las personas que quieran acceder, como es el examen que hay que superar, entre otros. Abordaremos este tema en otro apartado debido a su relevancia.

*Orden Ministerial de Acceso al Servicio de Turno de Oficio:*⁶ Esta orden, recoge los requisitos mínimos que debe tener todo profesional si quiere dedicarse al desempeño de la Asistencia Jurídica Gratuita.

Código Deontológico: Contempla las pautas a seguir en el ámbito de la ética y los principios que deben regir la profesión. Está en reforma actualmente para adaptarse a los cambios que se han producido en estos años, especialmente debido a la influencia de las redes sociales y nuevas tecnologías.

Relación laboral de los abogados: Regulará la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo.⁷

Colegios profesionales y Consejo General: El reglamento de régimen interior del Consejo General de la Abogacía Española tiene por objeto regular el funcionamiento del Consejo, la convocatoria, constitución y funcionamiento de sus órganos, siempre que no esté previsto en el Estatuto General de la Abogacía.⁸

Ley de Sociedades Profesionales: La evolución de las actividades y la complejidad de las nuevas situaciones ha llevado a cambiar la forma de trabajar entre los profesionales, de pasar a la individualización a la labor de equipo, por lo que esta ley tratará de regular este nuevo profesional colegiado mediante su constitución como sociedad profesional y su posterior inscripción en el registro correspondiente.⁹

⁵ Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

⁶ Orden de 3 de junio de 1997, por la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

⁷ Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

⁸ Reglamento de régimen interior del Consejo General de la Abogacía Española. Octubre de 2016.

⁹ Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

Derechos y libertades: Fundamental importancia del cumplimiento, protección y difusión de los Derechos Humanos y cumplimiento de convenios y pactos internacionales civiles y políticos.

Reglamento de Procedimiento Disciplinario: Recoge la posibilidad del ejercicio de la Potestad Sancionadora. Será aplicable directamente al Consejo General de la Abogacía Española y, en su caso, con carácter supletorio en las actuaciones que realicen los Colegios de Abogados y los Consejos Autonómicos con el objeto de depurar la responsabilidad disciplinaria en que puedan incurrir los Abogados, los colegiados no ejercientes y los Abogados inscritos en virtud del Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, en caso de infracción de sus deberes profesionales, colegiales o deontológicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal exigible.¹⁰

Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: La Ley 11/2007 recoge el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración mediante formas telemáticas como bien dice su exposición de motivos y su artículo primero, en un intento de adecuar la Administración a los tiempos actuales pese a que se reconozca que aún es insuficiente debido a que determinadas disposiciones dejan en manos de la Administración la decisión acerca de si los ciudadanos pueden relacionarse con ésta de forma electrónica. En lo que nos atañe, en la actualidad han surgido programas como por ejemplo LEXNET, que trata de gestionar telemáticamente las notificaciones de los juzgados a abogados y procuradores.

Unión Europea: Directiva 98/5/CE, de 16 de febrero de 1998, que regula el ejercicio del abogado en Estado miembro distinto a donde adquirió el título, Directiva 89/48/CEE sistema general reconocimiento títulos enseñanza superior que sanciona el R.D. 936/2001 por el que se regula ejercicio en España abogado con título obtenido en otro Estado de la UE.

Estas directivas tratan de regular la forma de actuar y el reconocimiento del ejercicio de la abogacía en toda la Unión Europea, como directivas que son, serán adoptadas en nuestro país como derecho positivo y por ende, todos aquellos que se dediquen a la profesión, tendrán la obligación de cumplirlas.

¹⁰ Artículo 1.2 Reglamento de Procedimiento Disciplinario. En desarrollo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.

Una vez que hemos conocido las principales leyes a las cuales deben atenerse todos aquellos abogados en su ejercicio profesional, desarrollaremos de manera más exhaustiva el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El objeto de este reglamento es y cito textualmente “mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Sin embargo, según NAZARIO DE OLEAGA¹¹ vocal de la Junta Directiva de la Academia Vasca de Derecho y con la que comparto opinión, esta regulación ha sido impuesta porque los estudiantes de derecho no tenemos el suficiente nivel como para ejercer de abogados, personalmente lo comparto debido a mi experiencia en mis escasos contactos con la profesión, por lo que entendemos justificada la Exposición de Motivos de la Ley, se trata de un derecho fundamental que hay que proteger y que sin una adecuada preparación de los profesionales, se podría ver o bien cercenada o bien puesta en peligro, ya que se trata de cuestiones y responsabilidades ligadas al ámbito de los derechos fundamentales, si bien el autor critica en su texto que el problema no es tanto de la ley sino de la formación de los propios formadores y de la calidad de las Escuelas de Práctica Jurídica ya que el Consejo General de la Abogacía Española ha homologado todas las escuelas de manera homogénea sin tener en cuenta su competencia, ya que él como persona que ha ostentado un cargo de responsabilidad en la práctica jurídica profesional es conocedor del insuficiente nivel de las Escuelas.

En los últimos años, siguiendo a este autor, se han venido publicando normativas tanto de ámbito europeo, como de la Comisión Nacional de Competencia, como de entidades menores, que ponen en cuestión la utilidad de los Colegios de Abogados o de la colegiación obligatoria.

¹¹ DE OLEAGA, N., “Tribuna abierta-Acceso a la profesión de Abogado” en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 30 (2011).

El Consejo General de la Abogacía Española, en adelante, CGAE, se compone por más de ochenta colegios que no son capaces de facilitar los servicios más elementales a profesionales y a los ciudadanos, este problema, no es de ahora, sino que proviene de un arraigo histórico sobre todo de la década de los años treinta, que nos obliga a seguir arraigados a una filosofía que defiende la existencia de los colegios por el mero hecho de serlo. El requisito previo para acceder a la formación de la obtención de los títulos de abogado o de procurador es el haber superado el Grado en Derecho que acredite que se han conseguido las exigencias jurídicas necesarias para los estándares de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o de los órganos de evaluación de las comunidades autónomas.¹²

En cuanto a los cursos de formación, intervendrán tanto las universidades como las escuelas de práctica jurídica que dependen de los colegios de abogados, poniéndose énfasis en la necesaria colaboración entre ambas entidades mediante el establecimiento de un convenio que garantice la calidad de la enseñanza impartida, es por esto por lo que el reglamento establece un instrumento para profundizar en la consecución de este fin, la impartición conjunta de colegios, escuelas y universidades de los cursos de formación con el fin de aunar esfuerzos y mejorar la formación. Se establece además la posibilidad de optar a becas para que con independencia de los medios económicos que posean las personas que quieran optar a la formación puedan hacerlo.

Existe libertad para las universidades y escuelas en cuanto a la configuración de los cursos de formación que imparten, así como para el periodo de prácticas. El reglamento establece para el periodo formativo el cumplimiento de unos planes de estudios de 60 créditos ECTS. Estos cursos, deberán ser acreditados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Justicia antes de impartirse, y renovar periódicamente su acreditación cada seis años. Este procedimiento de validación será distinto según se trate bien de universidades o de escuelas de práctica jurídica, aunque se partirá de un fin común, garantizar la calidad de la enseñanza. La necesidad de acreditación ante ambos Ministerios hace salvaguardar la unidad de criterio que debe prevalecer en ambas entidades.

¹² Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

En cuanto a la evaluación final, que consistirá en un Examen de Estado, tiene como fin asegurar que todos los profesionales hayan adquirido las competencias necesarias para el buen ejercicio de la profesión, tanto de la abogacía como de la procura, el reglamento ordenará el contenido y el desarrollo de este Examen de Estado, de enfoque eminentemente práctico que trata de ceñirse a situaciones reales que puedan vivir los abogados o procuradores.

El segundo objetivo será simplificar cargas y costes administrativos mediante la utilización de medios telemáticos a la hora de inscribirse, y la realización de las pruebas en un mismo día.

En tercer lugar, tener en cuenta los esfuerzos realizados por los estudiantes no solo en las pruebas de Estado sino durante toda la formación previa, que será necesario como es obvio superar para que cuente en el primer ejercicio de respuestas múltiples y la superación de éste para que sea corregido el segundo, que consistirá en un caso práctico.

En cuanto a la prueba de evaluación, requiere haber superado los cursos de formación, ser mayor de edad y no estar inhabilitado. Las materias se encuentran divididas en dos bloques¹³ el bloque A, recoge materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado, deontología, organización y ejercicio de la profesión, y cuestiones generales de la asistencia letrada, cuestiones en las cuales el grado, no profundiza demasiado, consideramos adecuada en este caso la existencia de formación complementaria.

En cuanto al bloque B, materias específicas, se tratan cuestiones sobre civil, mercantil, penal, administrativo, laboral y contencioso-administrativo.

2.2. Requisitos de acceso.

Los requisitos de acceso los encontramos recogidos en el artículo 2 del Reglamento. Habrá que estar en posesión del título de Licenciado, Graduado en Derecho o en cualquier otro título universitario o grado equivalente que reúna los requisitos del artículo 3 que citaremos posteriormente.

En segundo lugar, acreditar la superación de alguno de los cursos de formación necesarios para el ejercicio de la profesión.

¹³ FUERTES, J., “Sobre las pruebas de acceso al ejercicio de la Abogacía y la Procura”, en *Legal Today*, (septiembre 2017).

En tercer lugar, cumplir con el desarrollo de un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades, despachos relacionados con la abogacía o la procura, y por último, superar la prueba de evaluación final consistente en un Examen de Estado que acredite la respectiva capacitación profesional. Esta formación y evaluación de la capacitación deberá de estar siempre al servicio de los principios de accesibilidad universal y no discriminación.

En cuanto a los requisitos de titulación, están recogidos en el artículo 3 del Reglamento, estos requisitos son acerca de las competencias jurídicas que deben acreditar los aspirantes a abogados o procuradores, se trata de ocho competencias numeradas de la letra A la H, en las cuales se establece la necesidad de conocer y comprender elementos, estructura, aplicación, criterios de las fuentes, interpretación de textos, resolución de casos jurídicos como hemos comentado antes, manejar con soltura, destreza y precisión el lenguaje jurídico y utilizar las tecnologías de la información para la búsqueda de jurisprudencia, legislación, bibliografía etc.

Según, JAVIER FUERTES¹⁴, los aspirantes únicamente deben elegir una especialidad jurídica de las posibles, cuatro, y únicamente se le podrá preguntar sobre la materia escogida, por lo que cabe destacar que al escoger una materia, excluimos el resto, consideramos entonces que no está cumpliendo con el fin de la norma, asegurar la garantía y la mejor adaptación de los profesionales a la sociedad y a la administración de justicia para poder salvaguardar de la mejor manera el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva... si únicamente nos preguntarán acerca de una especialidad, es muy posible que muchos estudiantes por el mero hecho de no disponer de suficiente tiempo, únicamente se centren en una de las cuatro ramas acerca de las que va a ser preguntado.

Nos tenemos que cuestionar entonces como bien dice el autor, si no estaba mejor garantizado ese derecho mediante la práctica de la pasantía, ya que generalmente las prácticas, que en mi opinión es al final una de las partes más importantes de la formación (por no decir la que más) no era la mejor forma de adquirir conocimientos prácticos y teóricos.

¹⁴ FUERTES, J., *op cit*, p. 11.

2.3. Procedimiento

En cuanto al procedimiento, como ya hemos mencionado, es necesario haber superado el Grado en Derecho o bien la Licenciatura o un grado equivalente.

El Reglamento, en su artículo 5, capítulo II, establece que las universidades y los colegios deben garantizar el cumplimiento de los requisitos tanto del periodo de prácticas como de la formación teórica, y que debe de existir colaboración institucional. En conclusión, si un estudiante quiere acceder a la profesión de abogado, debe superar el Grado, realizar un curso de formación bien en forma de máster en una universidad o en forma de curso en una Escuela de Práctica Jurídica, ambas están homologadas y su resultado será el mismo, hacer que el estudiante pueda optar a realizar el Examen de Estado que acredite que está capacitado para desempeñar la profesión. Estos cursos deben garantizar que se han adquirido las competencias ya mencionadas pero puestas de relieve de nuevo en el artículo 10 del reglamento.

El plan de estudios que cumplirán los aspirantes se compone de 60 créditos ECTS. En cuanto al profesorado, todos los cursos deberán tener una cantidad equilibrada de abogados o procuradores según el caso y profesores universitarios de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por ciento ni sea inferior al cuarenta, artículo 14.

Estos abogados que integren el personal docente, deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres años antes, en cuanto a la universidad, los profesores deberán de poseer una relación contractual estable con una universidad.

El curso, estará también formado por una parte práctica de 30 créditos ECTS, el objetivo de estas prácticas, artículo 14, será que los estudiantes adquieran una serie de conocimientos como el poder enfrentarse a problemas deontológicos profesionales, conocer el funcionamiento de las instituciones relacionadas con la abogacía, la actividad de los demás operadores jurídicos, en general poder desarrollar los conocimientos y capacidades adquiridas en la formación de forma eminentemente práctica.

Las prácticas, artículo 15, se desarrollarán en juzgados, tribunales, fiscalías, sociedades o despachos, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones

Públicas, así como en instituciones oficiales o empresas, se podrán desarrollar bien de forma total o parcial.

En cuanto a la prueba de evaluación a la que van a enfrentarse los futuros abogados, lo contempla el artículo IV del Reglamento, que establece que serán únicas e idénticas para cada profesión. Su fin principal será el de comprobar que el alumno ha adquirido la formación práctica suficiente para el desarrollo de la profesión, y las competencias básicas que hemos mencionado con anterioridad. Se trata de una prueba escrita dividida en dos partes, el contenido será fijado por el Ministerio de Justicia, se pondrán a disposición de los estudiantes pruebas “piloto” para que éstos puedan hacerse una idea del tipo de prueba a la que se enfrentan.

La comisión evaluadora será la encargada de ordenar, dirigir y gestionar los ejercicios, artículo 19, existirá una comisión en cada comunidad autónoma, también deberá velar por la confidencialidad y el anonimato de las personas que se presenten. Excepcionalmente podrá haber más de una comisión evaluadora en una misma comunidad autónoma o una para varias. Será el Ministerio de Justicia quién se encargue de designar a sus integrantes y sus suplentes, pero se establece legalmente quienes serán las personas elegidas para desempeñar el papel de la comisión.

La comisión evaluadora deberá estar compuesta por, artículo 19.2:

- Un representante del Ministerio de Justicia integrado en o bien el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado, por lo tanto un funcionario de carrera.
- Un representante del Ministerio de Educación, o funcionario de carrera perteneciente a los grupos mencionados en el párrafo anterior.
- Un representante de la Comunidad Autónoma en la que se realice la prueba, designado por funcionarios jurídicos.
- Un abogado, con más de cinco años de experiencia en el ejercicio profesional que tendrá que ser propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.

Para la procura se establecen otros dos supuestos específicos.

- Un profesor universitario de cualquier rama jurídica designado por el Consejo de Universidades, y por último,
- Un representante del Consejo General del Poder Judicial.

Esta comisión depende en su variable funcional del Ministerio de Justicia, su representante ejercerá la presidencia, la secretaría sin embargo pertenece al Ministerio de Educación. Artículo 19.

Por último, en cuanto a su calificación, recogida en el artículo 20, será de apto o no apto, el primer ejercicio contará con la nota que haya obtenido el alumno en el curso de formación ponderado en un veinte por ciento. En caso de no superar el primer ejercicio, no se tendrá en cuenta el segundo.

Si no se ha superado la evaluación, existe la posibilidad de solicitar su revisión mediante un escrito a la comisión en el plazo de tres días desde la publicación de los resultados. La resolución del Presidente de la Comisión, como hemos dicho, dependiente del Ministerio de Justicia, pondrá fin a la vía administrativa, que abrirá el plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa. Los resultados y reclamaciones serán remitidos al Ministerio de Justicia por la comisión evaluadora.

3. JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO.

3.1. Normativa.

La justicia gratuita y turno gratuito se regulan en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuya última modificación data de junio de 2017 con la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, además de su respectivo Reglamento regulado por el Real Decreto 996/2003.

Esta Ley, que se compone de 54 artículos y sus correspondientes disposiciones, tiene por objeto la determinación del contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenido en el artículo 119 de la CE, y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad, art. 1 de la Ley.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley 2/2017 lo que se pretende es asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva desarrollando el mandato constitucional de los artículos 24, 25 y 119¹⁵, crear un marco constitucional que incluya la predisposición

¹⁵ Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

del Estado a facilitar los medios necesarios para conseguir que este derecho sea efectivo y real para todos, proveyéndose de los profesionales necesarios para litigar y ver defendidos sus derechos e intereses legítimos. Según recoge el texto lo que se persigue principalmente es una vocación unificadora mediante la unión de la dispersa legislación procesal que había regulado la Justicia Gratuita hasta ahora.

Se pretende dotar de una forma más amplia el derecho a la asistencia jurídica gratuita, “Ampliación del contenido material del derecho”. Igualdad de las partes en el proceso, eliminación de costes innecesarios debidos a las negaciones prácticas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como vemos, la Ley lo que pretende es simplificar el acceso de los ciudadanos al derecho y hacerlo eliminando trabas que se consideran innecesarias añadiendo nuevas prestaciones como el asesoramiento y orientación antes de iniciar un proceso, evitando litigios costosos e innecesarios, la asistencia pericial en el proceso y una reducción del coste de los documentos y escrituras notariales. Con esta Ley también se modifican artículos que introducen la novedad principal de la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 1:

“El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. “

Como vemos aquí se establece la obligatoriedad del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Artículo 22:

“Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio. “

Anteriormente, los profesionales no tenían derecho a compensación de carácter indemnizatorio.

Artículo 30:

Anteriormente en la redacción originaria de la Ley, su artículo 30 establecía simplemente que las actuaciones de los abogados solo serán retribuidas mediante fondos públicos. Se modifica el artículo pasando a denominarse “Indemnización por el servicio”:

“La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta ley. El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.”

Artículo 36: Ahora denominada “Condena en Costas” en la redacción originaria “Reintegro Económico”.

Artículo 37: Se elimina el segundo párrafo de la redacción originaria y se asegura el derecho del artículo 119 de la CE a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Artículo 40:

El artículo 40 pasa a llamarse “*Indemnización por baremo*”, y se modifica el término “módulos de compensación” por “*módulo de indemnización*”.

Además de las reformas practicadas en los artículos que hemos expuesto, la nueva Ley garantiza que el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita no esté sujeto a IVA que debido a la interpretación de la Sentencia Supranacional N° C-543/14, TJUE, 28-07-2016 les obligaba a pagarlo.¹⁶ El Ministerio publicó una Nota de Prensa en la que explicaba los efectos retroactivos de la Ley hasta la fecha del 1 de enero 2017.

En conclusión, el IVA se exigía debido a que se consideraba como “prestación de servicios” y por lo tanto trabajo remunerado, con la nueva Ley, se califica como indemnización, alejada de los precios de mercado, sujeta a baremo, el profesional no puede modificarla, por lo que se entiende que es lógico que la nueva reforma estuviera orientada a eliminar aquellas medidas fiscales que gravasen el servicio como una actividad remunerada en vez de indemnizatoria.

3.2. Caracteres de la justicia gratuita y el turno de oficio.

La justicia gratuita es un derecho recogido en el artículo 119 de la Constitución Española, con la nueva Ley, de lo que se trata es de garantizar que todos aquellos carentes de recursos puedan acceder a ella, es decir, *se garantiza la obligatoriedad del servicio*.

¹⁶Modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita. El turno de oficio seguirá sin estar sujeto a IVA. (23 de junio de 2017). Iberley.

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.

Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

Según el artículo 6 de la Ley 1/1996 el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

- “Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
- Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste”.
- Persona detenida consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado abogado.
- Gratuidad de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. Copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial, así como reducciones del 80 por 100 de derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. Y de aquellos derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas,

certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

En cuanto a su extensión temporal, artículo 7 de la Ley, se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia.

Sin embargo, en cuanto a la insuficiencia económica sobrevenida, recogido así en la Ley, se establece que no se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas de las solicitadas al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias sobrevenidas no tendrá carácter retroactivo.¹⁷

La Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita está regulado en el Capítulo II de la Ley:

En cada capital de provincia, Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita como órgano responsable dentro de su competencia territorial para llevar a cabo el derecho a la Asistencia. En Madrid, sin embargo, se establece una Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita que depende de la Administración General del Estado. Estas Comisiones se componen por los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid o el abogado o procurador que ellos mismos designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia del subgrupo A1. Esta Comisión será presidida cada semestre por cada uno de los miembros excepto el funcionario que será secretario.

¹⁷ Artículo 8 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la presidencia y la secretaría. Artículo 10.2 de la Ley.

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, el representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos. Artículo 10.3 de la Ley.

En cuanto a su funcionamiento, se ajustará a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para órganos colegiados. El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración General del Estado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones. Artículo 11 de la Ley.

3.3. Consejo General de la Abogacía Española.

El Consejo General de la Abogacía española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España formados por un total de 152.954 abogados ejercientes y 103.093 colegiados no ejercientes (datos a 31 de diciembre de 2016), tiene entre sus funciones la de ordenar el ejercicio profesional de los abogados y velar por el prestigio de la profesión, en definitiva, prestar servicios a Colegios y Abogados ejercientes.¹⁸ En cuanto a sus *orígenes*, se remontan al año 1942, cuando el Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Emilio Laguna, debido a la grave situación que vivía la Abogacía Española en la posguerra, envió una comunicación a todos los colegiados de Zaragoza y al Colegio de Abogados de Madrid, así como a todos los decanos del resto de España con el fin de crear un organismo superior que facilitase

¹⁸ Página Web del Consejo General de la Abogacía Española.

la actuación conjunta de todos los Colegios, se diera una mejor imagen de la Abogacía y se reforzara su posición en la renovación legislativa de la época.

La idea fue bienvenida y el entonces decano Antonio Goicoechea, del Colegio de Abogados de Madrid tomó las riendas del proyecto estableciéndose una serie de objetivos a cumplir como la supresión de cualquier tipo de impedimentos u obstáculos que pudiesen sufrir los profesionales a la hora de intervenir ante todos los tribunales y jurisdicciones, así como la creación de una Mutua que otorgara pensiones a huérfanos y viudas de abogados, subvenciones a los afectados de “inutilidad física o intelectual, o incapacitados para el trabajo por su vejez”¹⁹

La *Creación*, El Ministerio de Justicia aprobó por Decreto de 19 de junio de 1943 el denominado Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España, que recibió su primera composición por Orden Ministerial de 14 de octubre del mismo año. A lo largo de la historia del Consejo, los Congresos Nacionales de la Abogacía han supuesto auténticos acontecimientos renovadores. A partir del IV Congreso celebrado en León, se palpan cambios en el propio Consejo, que le permitieron adquirir la mayoría de competencias que ahora tiene. El X y último Congreso se celebró en Vitoria en mayo de 2015. Los aspectos anteriores se contemplan en la página web del CGAE. Cabe mencionar el Estatuto General de la Abogacía Española pese a que hablaremos de él en otro punto ya que es una de las bases principales que permitieron adecuar la profesión a los cambios producidos en la sociedad española desde 1982, fecha de aprobación del anterior Estatuto. Además, en él se recogen los deberes éticos y deontológicos de los abogados, se garantizan los principios de libertad, independencia y libre competencia y por ende se ven reforzados. Estos principios siempre estarán orientados al servicio de la persona defendida.

3.4. Requisitos de acceso a la justicia gratuita.

La Justicia Gratuita es un trámite por medio del cual se puede desarrollar el artículo 119 de nuestra Constitución Española, a través de ella se reconoce a quienes carezcan de recursos suficientes una serie de prestaciones en el proceso que consisten principalmente en el pago de honorarios de Abogado y Procurador, gastos derivados de peritaciones,

¹⁹ Página web del CGAE: Orígenes del Consejo General de la Abogacía Española.

fianzas judiciales... entre otros. El derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita comprende a grandes rasgos estas prestaciones:

- Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.
- Asistencia de Abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
- Exención de tasas judiciales, así como del pago de depósitos para la interposición de recursos.
- Asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
- Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
- Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.²⁰

En cuanto a su ámbito personal de aplicación, artículo 2 de la Ley, tendrán derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita:

- Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea que residan legalmente en España siempre y cuando se acredite la insuficiencia de recursos para poder litigar.
- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Asociaciones de utilidad pública previstas en el artículo 4º de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones y Fundaciones inscritas correctamente. Tratándose de las personas jurídicas mencionadas, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
- En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, además, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

²⁰ Artículo 6 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita.

- En el orden jurisdiccional penal, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
- En el orden contencioso-administrativo y vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español en cuanto a lo relativo a su derecho de asilo.

Artículo 3. Requisitos básicos:

Estará reconocido a “aquellas personas físicas que no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud en la suma de sus ingresos y recursos económicos anuales y por unidad familiar.” El concepto de unidad familiar está explicado en este artículo, y será aquella integrada por cónyuges no separados e hijos si los hubiere excepto los emancipados, padre o madre e hijos que reúnan los requisitos explicados.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios. No será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

Recogido en el artículo 5 de la Ley, encontramos un reconocimiento excepcional del derecho que se da “teniendo en cuenta las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas; la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional. En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué beneficios de los contemplados y en qué proporción, son de aplicación al solicitante.”

Por último, cabe una exclusión por motivos económicos. Está recogida en el artículo 4 de la Ley por la cual, “a los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que éste dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley. La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida habitualmente no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho, siempre que aquélla no sea suntuaria.”

3.5. Requisitos del turno de oficio.

El Turno de Oficio es un sistema por el cual, la Administración Pública o el Estado facilita los servicios de Abogado y de Procurador a aquellos ciudadanos que carecen de recursos económicos para costear la intervención de estos profesionales dentro del proceso. En el proceso penal el detenido e investigado tiene derecho a la designación de un defensor de oficio, independientemente de su situación económica. Los abogados que se adhieren al Turno de Oficio pueden desempeñar su oficio en cualquier lugar de España. Estos letrados tienen que acreditar su experiencia, además, se establecen una serie de mecanismos como los Cuestionarios de Control de Calidad para evaluar la profesionalidad del servicio, socialmente, el Turno de Oficio tiene gran aceptación y está bien considerado.

El Turno de Oficio, se regula a través de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en adelante LAJG, y su reglamento aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. Se aplicará en todo tipo de procesos judiciales, así como en la vía administrativa, el recurso de amparo, el asesoramiento previo al proceso y cuando así se establezca en la legislación. Cuando la intervención de los profesionales sea necesaria explícitamente o sea por requerimiento del Juzgado o Tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso, los beneficiados por el derecho dispondrán de defensa y representación gratuita. En virtud del art. 27 de la LAJG, no podrán actuar simultáneamente un Procurador o un Abogado de Oficio con un Abogado o Procurador de libre designación, es decir, que es la ley la que designa el Abogado o Procurador cuando sea preciso. Si el derecho finalmente no

fuera reconocido, los defendidos o representados tendrán que pagar los servicios prestados por los profesionales.

En cuanto a los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados:

1. Se establecen como requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita los siguientes, téngase en cuenta la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y la Orden 3 de junio de 1997, por la que se establecen los requisitos mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

a) Tener residencia habitual y despacho abierto en el ámbito del colegio respectivo y, en el caso de que el colegio tenga establecidas demarcaciones territoriales especiales, tener despacho en la demarcación territorial correspondiente, salvo que, en cuanto a este último requisito, la Junta de Gobierno del Colegio lo dispense excepcionalmente para una mejor organización y eficacia del servicio.

b) Acreditar más de tres años en el ejercicio efectivo de la profesión.

c) Estar en posesión del diploma del curso de Escuela de Práctica Jurídica o de cursos equivalentes homologados por los Colegios de Abogados, o haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios de turno de oficio y asistencia letrada al detenido establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados.

2. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno de cada colegio podrá dispensar motivadamente el cumplimiento del requisito establecido en la letra c) del punto anterior, si concurrieren en el solicitante méritos y circunstancias que acreditasen su capacidad para la prestación del servicio.

En cuanto a su organización, los Consejos Generales de la Abogacía Española y los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España son los encargados de regular y organizar los servicios de asistencia letrada y defensa y representación gratuitas siempre orientados a los criterios de funcionalidad y eficiencia, art. 22 de la Ley.

Los Colegios profesionales, establecerán de forma objetiva y equitativa los diferentes turnos y medios para designar los profesionales del Turno de Oficio, contarán con un turno de guardia permanente para prestar el servicio de asistencia letrada y de asesoramiento previo, así como para las víctimas más vulnerables como la violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y menores entre otros, art. 24 LAJG.

Sobre los derechos y obligaciones de los abogados en el turno de oficio, en este caso pese a que nuestro trabajo versa únicamente sobre el papel del abogado, cabe mencionar que procuradores y abogados comparten los mismos deberes en el ámbito del Turno de Oficio. En resumen, tienen derecho a una compensación de carácter indemnizatorio establecida por el CGAE dependiendo del tipo del procedimiento en el que intervengan. (Art 22 y 30). Desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio siempre sujetos a normas deontológicas y de funcionamiento de los servicios colegiales. (Art 23). Desarrollarán sus funciones siempre hasta el fin del proceso en la instancia judicial de que se trate. (Art 31 LAJG y 27 RD 996/2003, de 25 de julio).

Solamente en el orden penal, los abogados podrán excusarse de la defensa siempre que concurra un motivo personal y justo el cual será apreciado por el Decano del Colegio. Esta excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde que se haya notificado la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde que se presente.

Al hilo, deberá mencionarse la insostenibilidad de la pretensión: cuando el abogado al que le han designado un proceso considere que es insostenible la pretensión sobre la que versa el proceso, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los quince días siguientes a la designación, deberá exponer los motivos jurídicos por los cuales fundamenta su decisión. (Art. 32 a 35 LAJG). Si transcurrido el plazo, no se ha producido la comunicación o no se ha pedido la interrupción, el abogado quedará obligado a defender al ciudadano.

- Una vez formulada la insostenibilidad, la Comisión pedirá al Colegio de Abogados un dictamen acerca de su viabilidad que deberá emitirse en un plazo de quince días. Se solicitará también un informe del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio sea el mismo que el del abogado designado que deberá emitirse en un plazo no superior a seis días. Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado. Los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo abogado, para quien será obligatoria la defensa. En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita desestimaré la solicitud. (Arts. 33 y 34). No cabrá este procedimiento en el orden penal y respecto de los condenados.

- Por último, el régimen disciplinario de los abogados y Procuradores del turno de oficio se rige según el art. 42 por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las siguientes especialidades.
- La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave.
- La imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en la Ley llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
- Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y cuando la gravedad de los hechos denunciados así lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de aquellos hechos, por un período máximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto (art. 43 de la Ley).

4. DEONTOLOGÍA.

4.1. Código Deontológico de la Abogacía.

El Código Deontológico de la Abogacía es aquel en que se establecen unas normas mínimas de actuación que cualquier abogado en el ámbito territorial del Estado y de la Unión Europea (El Código Deontológico de la Abogacía asume íntegramente el Código Deontológico europeo) debe cumplir para garantizar que va a desarrollar de forma íntegra, ética y profesional su función.

El abogado, y más con la velocidad a la que avanzan las cosas hoy en día, es necesario que cumpla con unas normas de comportamiento que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes, pero no a cualquier precio. El actual Código Deontológico fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 27 de octubre de 2002 y modificado en el pleno del 10 de diciembre de 2002, no sin las sucesivas reformas que han tenido que adaptarse a las modificaciones legales más importantes que han afectado a las profesiones colegiadas, como por ejemplo las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.²¹

Los Colegios de Abogados y los Consejos Autonómicos serán los encargados de matizar el alcance, la interpretación... en cada ámbito territorial de las Normas del Estatuto, debido a que tienen carácter básico.

En cuanto a los principios fundamentales dentro del ejercicio de la profesión de abogado podemos hablar de la independencia, la dignidad, la integridad, el servicio, el secreto profesional y la libertad de defensa. Resaltamos este pequeño grupo dentro del Código

²¹ Preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía.

debido a que son valores que pueden ir y van entrelazados unos con otros como una forma imprescindible de desempeñar bien la tarea de abogado.

4.2. Obligaciones éticas y deontológicas.

Según el artículo 1 del Código Deontológico, el abogado está obligado a cumplir con las normas básicas éticas. Establece la obligación de respetar los principios éticos y deontológicos de la profesión. Cuando el abogado actúe fuera del ámbito del Colegio en el que tiene su residencia, pero siga en territorio español, deberá acatar además las normas éticas del Colegio de acogida o en el que esté desarrollando su actividad profesional.

En primer lugar, deberíamos hablar sobre el concepto de ética desde el punto de vista jurídico²², en ello, CHINCHILLA SANDÍ establece que la ética se encarga del estudio de los valores del ser humano, lo bueno y lo malo, de la moral y el derecho, aplicados a los profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, siendo una exigencia suya emitir una opinión más, acerca de lo bueno o lo malo; donde se trata de emitir juicios sobre la maldad o bondad de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. Es decir, lo que hace el Código Deontológico de la Abogacía, en adelante, CDA, es establecer que el abogado debe actuar con principios éticos para garantizar el fin común, en definitiva, establecer qué acciones son buenas o son malas o son justas.²³

Para GUTIERREZ SÁENZ, “la ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho, lo que debe realizarse, la conducta que debería tener la gente, lo que es correcto en determinadas circunstancias. La ‘mordida’, el ‘chanchullo’, el fanatismo religioso, son normales de hecho en ciertos ambientes; pero no son lo normal de derecho. La razón estudiará en cada caso y justificará lo norma del derecho”.²⁴

Según CHINCHILLA SANDÍ citando a GUTIERREZ SÁENZ, en la ética podemos encontrar dos objetos, uno material y uno formal el objeto material serán los actos

²² Cfr. CHINCHILLA SANDÍ, C., “El abogado ante la Moral, la Ética y la Deontología Jurídica” en *Revista de Ciencias Jurídicas*, 109 (2006).

²³ Cfr. GUTIERREZ SÁENZ, R., *Introducción a la Ética*, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005, p. 29.

²⁴ CHINCHILLA SANDÍ, C., *Ibidem*, P. 8.

humanos mientras que el objeto formal lo constituyen la bondad o la maldad de esos actos humanos, pudiendo extraer entonces las características principales de la ética²⁵:

Es una ciencia, es racional, es práctica, es normativa, su tema es la bondad y maldad de los actos humanos. Como complemento deberíamos hacer una mención a las relaciones entre *ética* y *moral* como objeto de nuestro estudio.

Ambas figuras están presentes en nuestra vida y cómo no, en la del profesional jurídico. La moral por un lado, orienta nuestras actuaciones directamente, la ética sin embargo, no tiene por qué tener una incidencia inmediata en nuestra vida, sino que puede servir para orientarnos indirectamente ya que su objetivo es elegir la opción moral más razonable.²⁶ Según TORRE DIAZ, en su obra *De la Ética y Deontología Jurídica*, la práctica, la ética y la moral se usan normalmente como sinónimos, en su significado etimológico ambas palabras son parecidas, siguiendo CHINCHILLA SANDÍ: a modo de ser, carácter (*ethos*: morada; *moris*: costumbre), se habla de un comportamiento poco ético de un abogado por ejemplo cuando no va de acuerdo al canon de moral establecido. No podemos entonces hablar de un concepto sin mencionar el otro.

La Deontología por otro lado,²⁷ etimológicamente expresa el deber (deon, deber en griego), lo que debe ser hecho. Podemos comprender y aplicar las normas éticas desde un punto de vista teleológico, dirigido al análisis de los fines, de las metas, de las consecuencias, de la utilidad, de las repercusiones de la acción, o deontológico, donde se brinda importancia a la cualidad intrínseca de obligación unida a la norma misma.²⁸

4.3. Independencia y libertad de defensa.

Los artículos 2 y 3 del CDA establecen la independencia y la libertad de defensa que deben regir la profesión de abogado. En cuanto a la independencia, es una exigencia del Estado de Derecho que permite hacer efectivo el legítimo derecho de todo ciudadano a su defensa, lo que nos permite hablar de derechos del abogado y no de deberes.

El abogado tiene que preservar su independencia para asesorar y defender los intereses de sus clientes frente a intentos de presiones, injerencias, complacencias, favores que

²⁵ CHINCHILLA SANDÍ, C., *op. cit.*, P. 9.

²⁶ CHINCHILLA SANDÍ, C., *op cit.*, p. 10.

²⁷ Cfr. DESCLOS, J., *Una moral para la vida*, Editorial San Pablo, 1994, pág. 393.

²⁸ CHINCHILLA SANDÍ, C., *Ibidem*, p. 10.

puedan coartarla por parte de poderes económicos, públicos, tribunales, clientes o compañeros, art. 2 del CDA. Este principio permite al abogado rechazar todo aquello que le suponga una injerencia en su libre elección y criterio a la hora de actuar, tanto en el asesoramiento como en la defensa del asunto.

De esta forma, se le prohíbe ejercer cualquier otra profesión que pueda resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía o que pueda interferir en esta última.

En cuanto a la Libertad de Defensa, cabe mencionar el derecho del abogado a defender y asesorar libremente a los clientes, en contraposición a su deber de no usar, para ello, medios ilícitos o injustos o el fraude, actuando siempre conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional.

Este derecho de libertad puede quedar vinculado al derecho de libertad de expresión recogido en el artículo 437 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.4. Incompatibilidades.

El Estatuto General de la abogacía en su artículo 22 establece las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales en el ejercicio de profesión, principalmente es incompatible el desarrollo de la abogacía con cualquier tipo de actividad que pueda interferir en la independencia y libertad del ejercicio. Por este motivo, el abogado no puede desempeñar cargos, funciones o empleos públicos en el Estado, o en cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales que pongan en entredicho esas condiciones intrínsecas al ejercicio, de igual forma, no podrá desempeñar cargos tales como Procurador, Graduado Social, Agente de Negocios, Gestor Administrativo, Auditor de Cuentas, u otro cuya normativa así lo especifique, ni tampoco mantener vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la Abogacía si esto último le impide el correcto ejercicio de la misma.²⁹

Si esto ocurre, el abogado a quien afecte alguna de las causas, supondría un incumplimiento del deber de abstención, es decir, que debería excusarse en la defensa encomendada. Además, deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar en esta situación, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta en un plazo de 30 días por escrito, así lo establece el artículo 6 del Código Deontológico. En caso de no cesar en esta situación, se computa como una infracción

²⁹ SÁNCHEZ, STEWART, N., “Las incompatibilidades como salvaguarda de la independencia” en *Manual de deontología para abogados*, Wolters Kluwer, 2016.

muy grave, y así se menciona en el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía Española, debiendo acatar las responsabilidades que le correspondan, art. 22 y 23 del Estatuto General de la Abogacía.

En cualquier caso, cabe destacar que, en el caso de ejercicio colectivo o colaboración de la abogacía, las compatibilidades de cualquiera de sus miembros o integrantes, grupo, o colaboradores, se extienden al conjunto de todos ellos, según el Código Deontológico.

5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ABOGADO.

5.1. Naturaleza de la relación abogado-cliente. Tipos de contrato.

DÍAZ BARBERO, abogado, en su publicación en la Página Web de Honorarios Abogados, nos habla acerca de la Naturaleza de la relación Abogado-Cliente.

DÍAZ BARBERO siguiendo a GUTIERREZ ZARZA³⁰ corresponde al Abogado, previa investigación de datos y redacción de escritos e informes llevar a cabo la defensa del cliente como parte del proceso, realiza además actividades de diversa índole que sin embargo no se encuentran establecidas en ningún tipo de contrato.³¹

PRIETO CASTRO, según DÍAZ BARBERO, señala que la naturaleza jurídica de la relación entre cliente y abogado, no se enmarca dentro de ningún contrato típico, sino atípico. El abogado no lleva a cabo su función dentro de ningún tipo de contrato al que estamos acostumbrados, sino que normalmente se suele hablar de “relación de servicio”. Existen, sin embargo, muchas teorías doctrinales que tratan de determinar cuál es el marco jurídico que rige las relaciones entre el cliente y el abogado, éstas han sido consideradas como mandatos, contratos de obra, de arrendamiento de servicios, contratos mixtos, multiformes, innominados, etc.³²

En la línea de GARCÍA BLEDA en Cuadernos del C.G.D.J.,³³ analizando el tipo de contrato que une al cliente y al abogado, el abogado en su tarea, no se limita a defender a su cliente como ya hemos dicho sino que es un ejercicio multidisciplinar que debe seguir al pie de la letra las reglas y mandatos deontológicos establecidos.

³⁰ GUTIERREZ ZARZA, A., *Las costas en el proceso civil*, Colex, pág. 161

³¹ ANDRÉS DÍAZ BARBERO. (2014). NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. MARZO 2018, de HONORARIOS ABOGADOS Sitio web: <http://www.honorariosabogados.com/wp-content/uploads/2013/11/Naturaleza-Juridica-Relacion-Abogado-Cliente1.pdf>. Pág.1.

³² ANDRÉS DÍAZ BARBERO. (2014). NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. MARZO 2018, de HONORARIOS ABOGADOS Sitio web: <http://www.honorariosabogados.com/wp-content/uploads/2013/11/Naturaleza-Juridica-Relacion-Abogado-Cliente1.pdf>. Pág.2.

³³ Cfr. GARCÍA BLEDA, J., “El contrato de servicios celebrado por los Abogados”, en *Cuadernos del C.G.P.J.*, pág. 78.

Podemos distinguir según DÍAZ BARBERO entre diversos tipos de contratos en los que se ha enmarcado la naturaleza jurídica de esta relación.

-*Contrato de mandato*: En la sociedad romana, los abogados no percibían remuneración alguna por su alta consideración, en concreto, no percibían honorario porque eran incompatibles con la figura contractual de la locación, figura destinada a los trabajos serviles, esto, se vio reflejado jurídicamente en la figura del mandato, caracterizado por su gratuidad.³⁴ DIAZ BARBERO citando a GARCIA GARRIDO³⁵, en la línea de Paulo, establece que el contrato se basaba en las reglas y costumbres sociales de los juristas, en el oficio, deber moral y amistad. El contrato de mandato como sabemos se caracteriza por su gratuidad, en Roma, esta circunstancia planteó problemas al principio, los intelectuales no cobraban por el trabajo realizado al considerarse parte de la carga de la amistad, como por ejemplo se le podía exigir al amigo el patrocinio, préstamos, la gestión e negocios etc. Esta regla entonces de la gratuidad comenzó a ser incómoda para los profesionales que acabaron creando los honorarios y merces, a partir de lo cual se consideraba que lo recibido por el mandato no fuera por el hecho de realizar el mandato sino como una forma de agradecer el servicio prestado.

En la actualidad, la doctrina mayoritaria no considera esta relación como mandato, (pese a que haya sentencias que sí), STS de 15 de diciembre de 1994 (RJ 1159, 1994), sobre todo por el hecho de que el mandatario tenga que someterse a lo que diga el mandante, poniendo en peligro la independencia profesional, la imposibilidad de indemnizar por daños y perjuicios si hay revocación de servicios y por último debido a que la sociedad ha evolucionado tanto que ha hecho que se haya perdido la base en la que sustentar esta teoría.

Para DIAZ BARBERO, en línea con MUÑOZ CONDE³⁶ cuando se trate de gestiones atípicas encomendadas a los abogados, gestiones que cualquier otra persona podría realizar, por ejemplo en el caso de ser representante de un contratante en una firma de escritura pública o la realización de determinadas gestiones en cuanto a su inscripción.

En cuanto al *Contrato de Obra* hemos de decir que la mayor parte de la doctrina rechaza este tipo de marco contractual, solo se admitiría en determinadas ocasiones como la elaboración de contratos, capitulaciones, estatutos, la emisión de un dictamen, ya que en

³⁴ Véase: <http://www.honorariosabogados.com/wp-content/uploads/2013/11/Naturaleza-Juridica-Relacion-Abogado-Cliente1.pdf> Pág 2.

³⁵ GARCIA GARRIDO, M., *Derecho Privado Romano*, Ediciones Académicas, 2008.

³⁶ MUÑOZ CONDE, L., *Las costas*, Montecorvo, pág.113.

estos casos, el fin es posible, el profesional se compromete a realizarlo y se realiza, pero como hemos dicho, de nuevo en la línea de MUÑOZ CONDE en su obra “Las costas”, en determinados supuestos ya que un letrado no puede determinar por ejemplo las resoluciones judiciales, eso le compete al juez.

Contrato de arrendamiento de servicios: Es la opción preferida jurisprudencialmente, art 1544 del Código Civil. La doctrina tampoco ha sido unánime siempre en torno a esta calificación, sin embargo, el TS ha declarado en múltiples ocasiones que las personas que ejercen profesiones liberales deben calificar sus relaciones como arrendamiento de servicios, Sentencia nº 156/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, Rec 495/2015 de 21 de Marzo de 2017, Sentencia Nº 13/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, Rec 215/2011 de 26 de Diciembre de 2011. El contrato de arrendamiento de servicios es un contrato por el que una parte se obliga respecto de otra a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. En este caso, el particular acude al abogado para plantearle un problema y que éste le ofrezca una solución. Aquí, el profesional se compromete a alcanzar lo pedido por el cliente, pero por otro lado, no le asegura que pueda conseguirlo al cien por cien.

Pese a que el desarrollo normativo del contrato en el Código Civil no es muy extenso y debe completarse, podemos establecer una serie de características acerca del contrato. Es de carácter consensual, oneroso y sus obligaciones son bilaterales y recíprocas.

Siguiendo a RODRÍGUEZ MONTEYS Y MARTINEZ MEGIAS³⁷ en su observación de la jurisprudencia del TS, podemos establecer que “Aunque de manera eventual y accesoria pueden ser encomendadas a los abogados gestiones propias del contrato de mandato o poderes de representación, en su esencia los servicios de los letrados, como los de las demás personas que ejerzan profesiones liberales, no constituyen más que una modalidad, siquiera lo sea muy elevada y destacada, de la que la tradición jurídica y nuestro Código Civil, vienen llamando contrato de arrendamiento de servicios...” extracto del artículo publicado por BONET³⁸.

No todas las gestiones realizadas por los Abogados tienen que enmarcarse en el contrato de servicios, sino que pueden regirse por las del mandato, como vital distinción el TS establece que el criterio de la sustituibilidad hace que solo pueden ser objeto de mandato

³⁷ MARTINEZ MEGIAS, R., y RODRÍGUEZ MONTEYS, JM., *La jura de cuentas*, Atelier, pág.28.

³⁸ BONET RAMÓN, J., “La naturaleza jurídica del contrato de mandato y el carácter del contrato de servicios cebrado por abogados y demás personas que ejercen profesiones liberales según la jurisprudencia del T.S” en *Revista de Derecho Privado*, 393 (1935).

aquellos actos en los que quepa sustitución, es decir, que el mandante haga normalmente y no salgan de su esfera de cotidianidad por así decirlo. Los servicios que se presten bajo el mandato, o el arrendamiento normalmente se considerarán remunerados salvo pacto en contrario. Esta remuneración, no está sometida a arancel, pero hay normas que matizan su naturaleza. Estas normas vienen impuestas por los Colegios de Abogados, y pueden tener dos características, una es la facultad de orientar y otra de poder establecer mínimos obligatorios y máximos.

GARCIA BLEDA establece una diferencia entre el trabajo que hace el abogado con fines judiciales, y el que es suficientemente importante como para devengar honorarios pese a no tener como finalidad una actuación judicial. La relación entre el abogado y su cliente sin embargo no siempre es voluntaria, es decir que el cliente elige al profesional que por ejemplo le han designado de oficio por lo que en este caso, una parte del contrato, retribución, se ve alterada puesto que es el Estado quién la establece; Además, existen actividades que pueden no enmarcarse en ninguna de las actividades que un abogado desarrolla en su día a día, o dentro de la Abogacía, sino que pueden ser en una empresa, o en otro tipo de trabajo dependiente que hará que los honorarios fijos que se reciban respondan a parámetros de otros tipos de contratos.

Para finalizar, GARCÍA BLEDA establece que la relación entre abogado y cliente es una relación de servicios <<sui generis>> muy complicada que hace que no pueda reducirse a un tipo contractual solamente como puede ser el de arrendamiento de servicios o al contrato de mandato, ya que estos contratos no son suficientes para recoger la infinidad de derechos, obligaciones vínculos y efectos procesales que derivan de esta relación.³⁹

5.2. Naturaleza y tipos de responsabilidad del abogado.

La responsabilidad del abogado nace del hecho de que es una profesión cualificada, lo que hace necesario la combinación de conocimientos técnicos con la pericia objetiva necesaria. Normalmente, lo que la doctrina y jurisprudencia utilizan para comprobar si se da o no responsabilidad profesional la “lex artis” de la abogacía ello supone que la obligación derivada del arrendamiento de servicios se haga siempre con calidad y profesionalidad, estos niveles de calidad con los que un profesional realiza su labor es lo que la jurisprudencia denomina “lex artis”⁴⁰ La abogacía tiene que ir en consonancia con la “Lex Artis”, es decir, cumplir con las leyes procesales y los deberes hacia el cliente,

⁴⁰ MARTÍ MARTÍ, J., “Lex Artis como obligación contractual”, en *Vlex España*.

como pueden ser el proporcionar la información adecuada, siempre con un lenguaje que éste si es lego en derecho pueda entender, explicar el estado en el que se encuentra el litigio, sus incidencias, recursos, gastos etc. Este deber según MARTÍ MARTÍ,⁴¹ debe darse en todas las profesiones en consonancia con su “Lex Artis” pero es especialmente importante en la de Abogado, sentencias del Tribunal Supremo lo avalan: STS 4 de Febrero de 1992 (RJ 12517, 1992), STS de 26 de febrero de 2007 (RJ 1187,2007), STS de 14 de mayo de 1999 (RJ 431, 1999), citando textualmente esta última: “Un abogado para cumplir con los requisitos de la diligencia especial hacia sus clientes debe cerciorarse que sus clientes están perfectamente informados cada vez que los avatares procesales abren una nueva etapa esencial para sus intereses, de lo que ello implica o lo que a los mismos puede afectar” .

La “Lex Artis” establece además como exigencia que se establezcan con plazo suficiente los recursos y demandas, así como sus resoluciones y fundamentaciones legales, una mala evacuación en el plazo de un escrito o bien un recurso por parte del abogado supondría una no presentación de estos y por tanto ir en contra de la “Lex Artis”, lo mismo sería si el escrito fuera redactado de mala forma o sin la diligencia de “un buen padre de familia”, con exposición de fundamentos inconexos e incorrectos, etc., el Estatuto General de la Abogacía se refiere a ello en sus artículos 1 y 42 cuando se refiere a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica del asunto. En definitiva, “Se exige al abogado una diligencia cualitativa que implica un canon de pericia superior a la de un buen padre de familia que es el común denominador”. Artículo 1104 del Código Civil. Para resumir, haremos mención de los diferentes conceptos que pueden derivar en responsabilidad civil para el abogado:

-Secreto profesional: El abogado tiene la obligación de no divulgar la información que le confiera su cliente en el ejercicio de la actividad profesional. La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 437.2 establece que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan en el ejercicio de la profesión y no podrán declarar sobre ellos. Ello hace que la intimidad como bien jurídico sea protegida incluso cuando la relación ya se ha extinguido.

-Deber de información: como ya hemos dicho se establece un deber de informar al cliente acerca de todos los pasos que se dan en el proceso e incluso antes de éste.

-Obrar en interés del cliente: No actuar contra sus intereses.

⁴¹ Martí Martí, Joaquim, *Lex Artis*, *op.cit.*, p. 35.

-Trabajar según la “Lex Artis”.

La responsabilidad se deriva normalmente del contrato de arrendamiento de servicios jurídicos, en este caso de una actuación incorrecta por parte del abogado que como responsabilidad profesional debe respetar el deber de fidelidad derivado del artículo 1258 del Código Civil, así como el de la calidad de las actuaciones en el servicio y en la ejecución. De esta forma si se actúa incorrectamente, con negligencia, contrariando todas estas estipulaciones sin guardar la debida diligencia a la hora de actuar, se derivará responsabilidad, si se han realizado actos u omisiones que den lugar a un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de la obligación.⁴²

Distinguimos entonces, dos tipos de responsabilidades, una penal y una civil.

Para incurrir en supuestos de Responsabilidad Civil lo que necesitamos es una conducta que sea reproachable, es decir, una conducta negligente. Según jurisprudencia, en concreto hablamos de la STS de 20 de mayo de 2014 (RJ 283,2014), una conducta puede derivar en Responsabilidad Civil siempre que se omitan normas aconsejadas por la experiencia más elemental. “El cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias. Si el abogado incumple las obligaciones contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad profesional, se trata de una responsabilidad contractual.” Será preciso también aparte de que no se haya actuado con la debida diligencia, que se haya causado un daño y que exista relación causal entre la actuación negligente y el daño producido. Las obligaciones del abogado se regulan en el artículo 42 del Estatuto General de la Abogacía, regulado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en él, de forma resumida se establece:

- Cumplimiento de lo establecido con la parte defendida, cumplimiento de la misión de defensa con el mayor celo y diligencia. Obligación de guardar secreto profesional
- Diligencia en las actividades profesionales, atención a las normas éticas, deontológicas y técnicas.
- Deber de asumir todas las responsabilidades civiles y deontológicas que le puedan corresponder.

En virtud del artículo 4.1 del Código Deontológico de la Abogacía, debemos recordar que la relación cliente-abogado, debe ser de confianza y exige por otra parte, la necesidad de que la conducta del abogado sea profesional, íntegra, honrada, leal, veraz y diligente.

⁴² https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf .
Pág.90-92.

Sin embargo, hemos de mencionar que no podemos tener una lista cerrada de los supuestos que conforman la responsabilidad civil del abogado. La STS de 14 de julio de 2005 (RJ 633,2005) a modo de ejemplo, entre otras ha señalado:⁴³“Informar de pros y contras, riesgo del asunto o conveniencia o no del acceso judicial, costos, gravedad de la situación, probabilidad de éxito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, respeto y observancia escrupulosa en Leyes Procesales, y cómo no, aplicación al problema de los indispensables conocimientos de la Ley y del Derecho”.

En la STS de 20 de mayo (RJ 2216, 2014), el Tribunal se reafirma en que: “la jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costes del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológico de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos.” En cuanto a las consecuencias, la determinación de la responsabilidad civil dará lugar al resarcimiento en forma de indemnización al cliente por daños y perjuicios, cuidando que exista como hemos dicho el nexo causal. Estos daños no tienen que provenir necesariamente de no obtener el resultado deseado por el cliente, sino que únicamente vendrá de la negligencia. El cliente será el encargado de probar que realmente se ha producido en daño. ⁴⁴

En cuanto a la responsabilidad penal de los abogados, podemos distinguir jurisprudencialmente una serie de tipos penales que son los que más comúnmente se suelen dar en la práctica.

-Presentación de testigos falsos. (Art 461.2 CP): En este caso, el abogado en el ejercicio de la profesión, y con conocimiento, presenta peritos, testigos o intérpretes condicionados. Se castigará en virtud de los artículos 458 y 460 del Código Penal.

-Obstrucción a la justicia en causa criminal. (Art 463 CP): “que, citado en legal forma,

⁴³ En: https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf. P.93.

⁴⁴ Véase: https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf P.94.

dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral”. Incluirá a testigos, peritos, intérpretes, u acusados en libertad profesional u en prisión, también a reincidentes en causas criminales. Cuando el responsable fuere abogado, procurador, o representante del Ministerio Fiscal en ejercicio de sus funciones, la pena se agravará. ⁴⁵

-Destrucción, inutilización u ocultación de documentos. (Art 465 CP): castiga a quienes interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad». La tentativa será posible. El concepto de proceso ha de entenderse de manera amplia para todos los ámbitos jurisdiccionales.

-Revelación de actuaciones procesales secretas. (Art 466.1): “abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”.

Entrarían en este caso, dar datos, o contar a terceros actuaciones o partes de actuaciones judiciales que son secretas. En este caso, para que se considere delito, será necesario que las actuaciones sean declaradas secretas por la autoridad judicial correspondiente.

-Deslealtad de abogados respecto de sus defendidos. (Art 467 CP): Tres supuestos.

Defensa o representación desleal: se castigará al abogado o procurador que habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta, defiende o representa en el mismo asunto a quienes tengan intereses contrarios.

Perjuicio por acción u omisión a la persona defendida o representada: El punto dos del artículo 467 castiga al abogado que por acción y omisión perjudique a los intereses de su cliente, intereses que le han sido encomendados. Por último, la imprudencia grave: si estos hechos han sido cometidos por imprudencia, se considerarán como agravante, pudiendo imponerse una multa de hasta doce meses e inhabilitación para desempeñar su profesión de hasta dos años. ⁴⁶

5.3. Valoración de daños e indemnización.

Esta cuestión acerca de la valoración y cuantificación del daño indemnizable es de las más complicadas en los procesos de responsabilidad profesional del abogado,

⁴⁵ En: https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf pp.96 - 97.

⁴⁶ Véase: https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf P. 98.

jurisprudencialmente muchas sentencias han desestimado procesos por el simple hecho de no poder demostrar que el incumplimiento del Abogado haya supuesto un daño patrimonial. La demostración de este hecho supone por así decirlo, hacer un juicio dentro de otro, es decir, suponer cual hubiera sido el resultado del proceso si no se hubiera producido la negligencia⁴⁷.

En este caso, merece la pena destacar la STS de 29 mayo 2003 (RJ 2003, 3914) respecto de recursos presentados fuera de plazo: “El caso que nos ocupa consiste en determinar si existe culpa en el Abogado por no entablar una demanda a tiempo (la acción prescribe o caduca), o por no interponer un recurso dentro del plazo establecido. Sobre esta segunda hipótesis versan la mayor parte de los casos de la jurisprudencia. Y en ellos se plantea una primera y principal disyuntiva, que es la siguiente: cuando el órgano judicial enjuicia la posible responsabilidad del Abogado, ¿puede o no –o tiene o no– que realizar ese órgano judicial una «operación intelectual» consistente en determinar (con criterios de pura verosimilitud o probabilidad) cuál habría sido el desenlace del asunto si la demanda se hubiese interpuesto o el recurso se hubiese formulado a tiempo? Si contestamos afirmativamente a esta pregunta, el juzgador podrá condenar al Abogado a satisfacer a su cliente una indemnización equivalente al interés que se hallaba en juego, o bien reducirla prudencialmente en función de la mayor o menor dosis de probabilidad de éxito (prosperabilidad que suelen decir los Tribunales) que el propio juzgador estime que habría tenido la demanda o el recurso intempestivos. Si la respuesta es negativa, el Juez deberá establecer una indemnización en favor del cliente, basada en una muy subjetiva apreciación de lo que para éste ha supuesto verse privado de la posibilidad de éxito en un juicio no entablado o en un recurso no promovido. Una expresión del razonamiento conducente a la condena, en ese caso, podría ser el consistente en la llamada «pérdida de oportunidad». Otra posibilidad, en este segundo caso, es la de que el Juez señale en favor del cliente una indemnización (también de discrecional estimación) por el daño moral que al cliente le ha supuesto verse privado de acceso a la Justicia».

En el caso de que se trate de daños patrimoniales o materiales, es necesario que la indemnización en estos casos sea correlativa a la resolución probable obtenida por el cliente en el caso de que no se hubiera producido la negligencia, probabilidad por cierto

⁴⁷ CAMPOS REGLERO, L., “La responsabilidad civil de abogados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo” en Revista de Responsabilidad Civil y Seguro, (2017).

muy escasa.

Destacamos las siguientes sentencias:

-STS de 28 de julio de 2003, (RJ 2003, 5989): Recurso de casación por el litigio resultante de una tercería de dominio sobre una finca. Este recurso se considera desierto porque el Procurador no dio traslado al Abogado del Auto de la Audiencia. El TS sin embargo consideró que era muy improbable que el recurso hubiere prosperado, aunque se hubiese presentado.

-STS de 14 julio 2003 (RJ 2003, 4630): Se desestima el recurso de casación del demandante porque el TS consideraba que la pretensión de nuevo no hubiera prosperado, aunque se realizó la conjetura oportuna. En este caso, se trataba de una reclamación de daños extracontractuales desestimada por prescripción de la acción imputable al profesional. Es “absolutamente opuesto tanto a la valoración de la prueba que en relación con la causa del daño sufrido por el también entonces demandante ofrece la sentencia recurrida como a la doctrina de esta Sala en materia de responsabilidad civil”.

Pérdida de oportunidad procesal y daño moral: Este es el concepto indemnizatorio que normalmente cuadra mejor con la naturaleza del daño que el cliente sufre.⁴⁸

El daño en este caso se refiere a la pérdida de oportunidad de participar en el proceso y defender su pretensión.⁴⁹

Para valorar este tipo de daños, la pérdida de oportunidad procesal, se debe atender al juicio de probabilidad y a elementos estadísticos en cuanto a la cuantía de la indemnización, ésta debe acercarse o alejarse del valor de la pretensión según sea su nivel de probabilidad de éxito, siempre en atención a las circunstancias y naturaleza de la pretensión que se quería exigir.⁵⁰ Podemos considerar entonces que cuando el juez, atendiendo a la naturaleza del caso puede determinar el éxito de la pretensión, el daño de la pérdida producida por la negligencia debe calcularse “aplicando el porcentaje de probabilidad de éxito de la acción al valor de la pretensión”.

El TS en ocasiones, ha considerado el daño moral derivado de la imposibilidad de la prestación al valor del daño patrimonial de la prestación sufrida, sin embargo, la “pérdida

⁴⁸ Véase: <http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/responsabilidadAbogadosTribunalSupremo.pdf> Pág 23.

⁴⁹ REGLERO CAMPOS, L., (2017) La responsabilidad civil de abogados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Documento presentado en el XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados en Responsabilidad Civil y Seguro, Vitoria, España, recuperado de <http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/responsabilidadAbogadosTribunalSupremo.pdf>

⁵⁰ REGLERO CAMPOS, L, *ibidem*, p. 23.

de oportunidad, debe tener un contenido patrimonial, porque de lo contrario, habría que indemnizar pretensiones con nulas o escasas probabilidades de éxito si lo subyace dentro del daño moral.

Por último, la cuantificación en la fase de ejecución de sentencia: En ocasiones, el TS, ha considerado que existe un daño sabiendo que es difícil cuantificarlo, dejando la cuantificación del proceso para la fase de ejecución. STS de 25 marzo 1998 (RJ 1651, 1651) y STS de 16 diciembre 1996 (RJ 8971, 1996).

6. ABOGACÍA EN EL SIGLO XXI: SIGLO XXI: ACTUALIDAD Y TECNOLOGÍA. UN NUEVO ENFOQUE DE LA ABOGACÍA.

En este último punto del trabajo, podemos afirmar que la abogacía ha ido evolucionando poco a poco para adaptarse a las nuevas necesidades de una sociedad en continua evolución, pese a que es una profesión poco estática en cuanto a su herramienta principal de trabajo como son las leyes, si lo es en cuanto al uso y forma de ejercer la profesión. Cuando hablamos del Derecho y más concretamente en este caso de la Abogacía siempre se nos viene a la mente un montón de libros, individualidad, estudio...seriedad e incluso antigüedad.

Con este apartado lo que trataré es de mostrar cómo la Abogacía se está adaptando a los cambios de la sociedad, muchos de los nuevos abogados son “nativos digitales” no esperábamos que fuera entonces de otra forma, obliga de alguna manera a todos los demás profesionales “a ponerse al día” en cuanto al uso de la tecnología, los medios telemáticos (objetivo de las administraciones de desterrar el papel de los procedimientos...) en definitiva, convertir al Letrado, en un Letrado de las TIC, con una inmersión total en las nuevas tecnologías.

PERE HUGUET en la Revista Cinco Días del País, ex vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, “la abogacía tiene un grado de implementación de las nuevas tecnologías mayor que el de muchas otras profesiones. La abogacía española es de las más modernas de nuestro entorno”. Por ejemplo, ya todos los Colegiados tienen un correo electrónico propio del Colegio alojado en el CGAE y todos los datos que se transmiten desde estas cuentas están encriptados, cumpliendo de forma fehaciente con los altos requisitos de seguridad que se dan en este tipo de situaciones garantizando así el secreto profesional.⁵¹

No solamente en cuanto a la transmisión de información o el uso de cuentas de correo electrónico, sino que se pretende telematizar todos los pasos posibles del procedimiento, acceder a través de un “clic” a toda jurisprudencia, minimizar al máximo el esfuerzo...si bien es verdad que los nuevos juristas nos planteamos entonces cómo podrían “sobrevivir” los profesionales anteriores sin el uso de estas nuevas tecnologías, sin el

⁵¹ CAPA, C., “Entrevista a PERE HUGUET: Abogados cada vez más tecnológicos” en *Cinco días El País*, (2014).

acceso tan sencillo y fácil a la información.

Se plantea entonces una dicotomía en cuanto a lo que se pretende por parte de la Administración y lo que en verdad se consigue. La Administración, a día de hoy, no está preparada para pasarse al perfil tecnológico. Según Huguet “el futuro pasa por abogados que conozcan el derecho digital. En la actualidad, es inconcebible que un bufete no cuente con un experto en derecho de las nuevas tecnologías”.⁵² Si bien, en mi opinión, lo tendremos más fácil aquellos que hemos nacido en la “era digital” que no aquellos profesionales que apenas no le dan importancia o que bien no quieren actualizarse, como en toda profesión es necesaria una regeneración y una adaptación a las demandas que precise el mercado.

Esto, se refleja inevitablemente en la forma de desarrollarse de los propios despachos, en su clasificación más tradicional distinguimos entre los despachos colectivos e individuales.

Colectivos son aquellos en los cuales la titularidad del despacho está repartida entre varios socios que se agrupan para ejercer la abogacía. Normalmente suelen repartirse las especialidades. Estos despachos en su mayoría, se distribuyen los beneficios en función de la participación de los socios.

En cuanto a los despachos individuales, es una única persona quién lleva todas las cuestiones del despacho, y suele estar especializado en varias ramas del derecho.

Actualmente, debido a la proliferación de casos distintos a los cuales estaban acostumbrados los abogados anteriormente, este tipo de despachos colectivos son los que más suelen abundar y hacen peligrar los despachos individuales en cuanto a los grandes asuntos, quedando relegados los despachos individuales a las tareas “más comunes” como pueden ser la firma de contratos, testamentos, arrendamientos, divorcios de mutuo acuerdo, escritos de procedimientos procesales, monitorios etc es decir a aquellos

⁵² CAPA, C, “Abogados cada vez más tecnológicos” en *Cinco días El País*, (2014)

procedimientos más habituales, son los llamados despachos commodity⁵³

En un futuro, aparte del peligro de monopolización por parte de los grandes despachos cada vez más externalizados y especializados en todo tipo de procedimientos, existe otro inminente y para el cual actualmente los despachos individuales no se encuentran preparados, uso masivo de internet y la creación de páginas web, portales...que pueden competir en precios, que evitan tiempo y que son más eficientes, haciendo que los pequeños despachos pierdan esa gran parte de ganancias al ser desempeñadas sus tareas habituales por páginas web. El abogado, no tendrá que desplazarse, y habrá procedimientos incluso judiciales que únicamente podrán desarrollarse vía telemática, este es uno de los objetivos principales de las Administraciones, permite agilizar procedimientos y “liberar” en cierta medida carga de trabajo a los operadores jurídicos.

La solución a ello pasa por la especialización y adopción de nuevas estructuras dentro del despacho y dentro de la organización. Esto, también será aplicable a los grandes despachos, sin embargo, estos al poseer normalmente mejores medios que los despachos individuales, considero que lo tendrán más fácil para adaptarse al cambio que un despacho de una sola persona.

El gran objetivo del sector se plantea entonces como una cuestión lejana pero cierta, es decir, los grandes despachos saben que hay que digitalizar los bufetes, los propietarios de despachos individuales también, pero casi siempre por falta de medios, no pueden “ponerse a la altura” de los grandes despachos, yendo a la cola de éstos. A su favor podemos decir que no todas las personas pueden permitirse acudir a las grandes firmas de abogados para realizar tareas cotidianas, y que muchos optarán por mantener el modelo tradicional de negocio, acudir al abogado y no a internet, es importante en cualquier relación laboral el contacto entre ambas partes como punto de confianza, habrá personas a las cuales la red les parece un modo frío y poco claro de tratar asuntos importantes, demasiada información y no siempre con un lenguaje adaptado a todo el mundo y dirigido a los operadores jurídicos principalmente.

⁵³ JORDI ESTALELLA. (2013, 5 septiembre) EL MERCADO LEGAL Y LA EVOLUCIÓN DE LOS DESPACHOS [Publicación en un blog]. Recuperado 5 mayo, 2018, de <http://www.jordiestalella.com/el-mercado-legal-y-la-evolucion-de-los-despachos/>.

En la revista *Expansión*, he podido comprobar cómo han respondido los principales directivos de los despachos más importantes de nuestro país ante las preguntas de cuáles serían los retos más importantes del sector a corto plazo y a la pregunta de qué cambios consideran que deben hacer las firmas legales a medio plazo para conseguir la digitalización de los despachos.

En resumen, los presidentes ejecutivos de despachos como Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez o Legálitas entre otros coinciden en la modernización del modelo de negocio, soluciones inmediatas mediante “Bufetes más predictivos” con abogados junior “Millenials” que estén formados en otras disciplinas aparte de en la jurídica, debido a que la revolución tecnológica que se producirá hace que la necesidad de asesoramiento de los clientes cambie y aumente el nivel de exigencia tanto por parte de estos hacia los operadores jurídicos como de éstos mismos hacia la propia profesión y sus ejercientes.⁵⁴

El perfil del abogado en el siglo XXI:

La crisis de 2008 concretamente, así como la inmersión casi completa de la sociedad en las nuevas tecnologías, ha favorecido que el sector legal cambie.

Como hemos dicho, supone que los profesionales no solo estén formados en la excelencia jurídica sino también en muchas más especialidades y que además desempeñen sus funciones con la calidad y eficiencia esperadas.

Este mercado, tanto por su forma de crecimiento como por su composición es complejo, han cambiado sus formas tradicionales de expansión y de competitividad haciendo que sea necesario cambiar la forma de negocio para poder prosperar haciendo que las estructuras tradicionales de despachos individuales sean sustituidas por socios, carteras, externalización o integración. Según fuentes del sector, los negocios que más han crecido desde entonces son los más flexibles, diferentes y los que son capaces de adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes, los llamados ABS, Alternative Bussines Structures.⁵⁵

El entorno es cada vez más competitivo, afortunadamente los profesionales están mejor

⁵⁴ SAIZ, S, “La digitalización de los bufetes, el gran desafío del sector” en *Expansión*, (2017)

⁵⁵ NOTICIAS JURÍDICAS REDACCIÓN. (2016, 6 septiembre). EL PERFIL DEL ABOGADO DEL SIGLO XXI. Recuperado 5 mayo, 2018, de <http://noticias.juridicas.com/legal-management-forum/noticias-del-lmf/11289-el-perfil-del-abogado-del-s-xxi/>

formados y especializados, al menos es lo que se pretende con las reformas legales efectuadas, hay muchas más personas que pueden permitirse una formación completa y eficaz y evidentemente eso hace crecer la competencia, aumenta la demanda y el cliente tiene una gran variedad de producto que escoger en el que el profesional que mejor preparado esté lógicamente será quién mayores beneficios obtenga.

El modelo de negocio tradicional está evolucionando hacia empresas de servicios jurídicos que les permiten crear nuevos nichos de mercado que ocupar siempre al servicio de las nuevas necesidades y la eficacia en los costes, solo los más preparados van a ser capaces de “sobrevivir” al cambio del modelo del sector.

Los abogados, van a tener que adquirir capacidades de liderazgo, lideran proyectos y lideran equipos, gestionar riesgos e intentar disminuirlos. Como hemos dicho, la demanda es tan grande que obliga a estar muy preparado para poder participar de una cuota de mercado.

Estos cambios afectan directamente al perfil del abogado, las habilidades jurídicas se convierten en algo que necesariamente hay que tener, en una cualidad intrínseca del abogado que ha “perdido valor” por decirlo de alguna manera, no es suficiente con ser bueno en la técnica jurídica sino que hay que tener un buen perfil comercial, y una buena capacidad de gestión y liderazgo del negocio que sea capacidad además de gestionarlo de generarlo, de crear más.

Además de estos requisitos, no olvidemos que es necesario saber idiomas debido al proceso de globalización y si es posible estar especializado no solamente en el derecho del país propio del profesional sino en los demás ordenamientos jurídicos como un requisito previo que cumplir a la hora de generar negocio.

En definitiva las tres características más buscadas en los profesionales del sector son: la capacidad de trabajar en equipo, buena comunicación, eficacia y liderazgo.⁵⁶

⁵⁶ NOTICIAS JURÍDICAS REDACCIÓN. (2016, 6 septiembre). EL PERFIL DEL ABOGADO DEL SIGLO XXI. Recuperado 5 mayo, 2018, de <http://noticias.juridicas.com/legal-management-forum/noticias-del-lmf/11289-el-perfil-del-abogado-del-s-xxi/>

7. CONCLUSIONES

1.-El ejercicio de la abogacía es una actividad fundamental de nuestra sociedad que evoluciona a medida en que ésta lo hace para adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas. Con la reforma operada en la Ley de Acceso al Ejercicio de la Abogacía se pretende conseguir adaptar de una mejor manera a los profesionales a estos cambios mediante una mayor formación y especialización, requisitos indispensables para “sobrevivir” actualmente dentro de la profesión.

2.-Con la realización del trabajo he intentado transmitir de la manera más sencilla posible qué es lo que tiene que aprender y a qué tiene que enfrentarse un estudiante de derecho u otro operador jurídico a la hora de ejercer la profesión, o simplemente que requisitos le capacitan para ser abogado en el caso de que quisieran planteárselo.

3.-Otro punto fundamental que hemos comentado es la responsabilidad del abogado dentro del ejercicio de la abogacía, un tema, por lo general poco conocido y poco estudiado durante el Grado. Los abogados, como sujetos de una relación laboral, tienen obligaciones que deben desempeñar con la mayor diligencia posible. Normalmente no se ven demasiados casos en los que se derive responsabilidad por parte de un letrado hacia su cliente u hacia otro profesional, pero es algo que existe y se da más comúnmente de lo que se cree, sin embargo, nuestros tribunales aún no han establecido doctrina suficiente acerca del tema como para ser considerado un tema habitual dentro de los juzgados.

4.-Por último, he aprendido cómo los abogados, ya como requisito previo necesitan no solamente tener una formación en derecho de un determinado país, sino que el mercado ha evolucionado de tal manera que es necesario que el profesional del derecho lo sea de su propio país y si es posible de un país extranjero, conozca más de un idioma, tenga dotes comerciales y sobretodo que sea un Abogado de las TIC.

Las nuevas tecnologías obligan a que la profesión inevitablemente cambie, y pueden afectar incluso a la existencia de despachos físicos como hemos comentado, por lo que, con el presente trabajo, he pretendido que el futuro letrado conozca en la medida de lo posible a qué tiene que atenerse en un futuro no muy lejano y como puede enfrentarse a esas barreras de la mejor manera posible para desarrollar su profesión con el mayor éxito.

8. BIBLIOGRAFÍA

B FERNANDEZ, C, Y VIGIL HOCHLEITNER, A, “Entrevista a Ashish Nanda”, en *Revista negocios de El País*, 1672 (2017)

BIURRUN ABAD, F, “La tecnología al servicio del abogado, quién está a su vez al servicio de su cliente” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 930 (2017)

ÉCIJA BERNAL, A, “Ciberespacio, ciberderecho y ciberabogados” en *Diario La Ley*, 2 (2017)

BIURRUN ABAD, F, “Facilitar a los abogados perseguidos tecnologías seguras, objetivo del Legal Hackathon” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

BIURRUN ABAD, F, “#AbogadosenTwitter: ranking de los principales influencers” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 935 (2017)

COLLIGNON, T., *Iniciación al ejercicio de la abogacía*, C.S.I.C., Madrid, 1952.

CALZADO LUJÁN, G, “Contract Lawyering, ¿Es el futuro de la abogacía?” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

CÁLABIA I REIXACHS, J, “La ética del abogado en la era de la revolución tecnológica” en *Revista Conflegal*, (2017)

FERNÁNDEZ, LEÓN, “El abogado del siglo XII o el abogado humanista”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 935 (2017)

GONZÁLEZ PALACIOS, D., “Responsabilidad Civil y Derecho de Daños tras las reformas legislativas de 2015”, en, GARCÍA PRESAS, I (Coordinador), *Colección de Derecho Civil*, Juruá Editorial, Lisboa, 2016.

HERREDOR GUARDIA, MJ., *Responsabilidad Civil y seguro, (Cuestiones actuales)*, Ediciones Francis Lefebvre, Barcelona, 2018.

J&F, “De la Asistencia Jurídica Gratuita y su prestación, sobre la Ley 2/2017, de 21 de junio, de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

MARTINEZ, L, “Hoja de ruta: Quiero montar mi propio bufete”, en *Mutualidad de la Abogacía*, 99 (2018)

MARTIN GONZÁLEZ, M, “El turno de oficio como servicio público obligatorio y gratuito”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

MATE SATUÉ, L, “La libertad de expresión del abogado en defensa de los intereses encomendados” en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 02 (2017)

MELGOSA GUMPERT, S, “Frente al determinismo, el Defensor del Abogado” en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

MUÑOZ MACHADO, S., *Historia de la abogacía española, Cizur Menor, Navarra: Aranzadi*, 2015.

PÉREZ DEL VALLE, C, “Juristas y nuevas tecnologías, crónica de una paradoja” en *Diario del Derecho*, (2018)

URRUTIA SAGARDIA, E, “Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Carácter indemnizatorio de la compensación y obligatoriedad de la prestación”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, 932 (2017)

